



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

17 de abril de 2026

Núm. 322-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY

124/000044 Proposición de Ley sobre simplificación y racionalidad de trámites ciudadanos.

Remitida por el Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(124) Proposición de ley del Senado.

Autor: Senado

Proposición de Ley sobre simplificación y racionalidad de trámites ciudadanos.

Acuerdo:

Considerando lo establecido en el artículo 125 del Reglamento, encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 7 de mayo de 2026.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIDAD
DE TRÁMITES CIUDADANOS

Exposición de motivos

En el ámbito de la administración se puede definir la eficiencia como el balance positivo que resulta del análisis del resultado y los recursos invertidos para la consecución del mismo. Se entiende que existe la eficiencia cuando se utilizan los mínimos recursos posibles para lograr un objetivo.

La complejidad administrativa constituye hoy uno de los principales obstáculos estructurales en la relación entre la ciudadanía, el tejido empresarial y las administraciones públicas. La acumulación de trámites, la reiteración de exigencias documentales, la inercia organizativa de las propias Administraciones y la falta de coordinación efectiva entre órganos administrativos generan dilaciones, inseguridad jurídica y una carga desproporcionada para los interesados, obligándolos a asumir costes de tiempo y gestión que no responden a necesidades reales de control público, sino a déficits internos de funcionamiento administrativo. Esta situación repercute directamente en el acceso a derechos, prestaciones y servicios públicos en ámbitos como ayudas sociales, prestaciones por dependencia, becas, procedimientos de extranjería o acreditación de situaciones personales, dificultando su ejercicio efectivo y erosionando la confianza en la Administración.

La simplificación administrativa constituye, asimismo, un elemento esencial del gobierno abierto, en la medida en que refuerza la transparencia operativa, la responsabilidad activa de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de los poderes públicos. Un modelo administrativo moderno no puede seguir basándose en la reiteración sistemática de requerimientos documentales al ciudadano, sino que debe partir del principio de que la carga de la interoperabilidad, la coordinación interna y la gestión eficiente de la información corresponde a las propias Administraciones Públicas.

Abogar por la reducción de los trámites administrativos en pro a la eficiencia favorece en primer lugar al propio ciudadano, pero también a la misma Administración, que también ve reducida su propia burocracia y esto conlleva la reducción del gasto público, que puede invertir los recursos en la ejecución de objetivos realmente importantes.

El ordenamiento jurídico vigente no carece de instrumentos adecuados, sino que presenta un problema de aplicación efectiva. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, configura un modelo de actuación basado en la eficiencia, la simplificación procedimental y la responsabilidad activa de la Administración en la gestión de la información que ya obra en su poder. En particular, la redacción vigente de los apartados 2 y 3 de su artículo 28 —introducida como consecuencia de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales— refuerza expresamente el derecho de los interesados a no aportar documentos que ya hayan sido elaborados o se encuentren en poder de cualquier Administración Pública, así como la obligación correlativa de estas de recabarlos por medios electrónicos, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto a la normativa de protección de datos personales.

No obstante, la experiencia práctica evidencia un incumplimiento sistemático de este marco normativo, trasladando a los ciudadanos y a las empresas la carga de suplir la falta de interoperabilidad y de organización interna. Por ello, es necesaria la creación de una administración más cercana, más transparente, más eficiente y centrada en las necesidades reales de los ciudadanos y las empresas. Esta situación resulta especialmente lesiva cuando afecta a administraciones de proximidad, que a menudo disponen de la información necesaria para resolver los procedimientos con mayor rapidez y conocimiento de la realidad social del ciudadano, pero se ven condicionadas por disfunciones estructurales de coordinación interadministrativa ajenas a su ámbito de actuación.

En el ámbito empresarial, según el estudio «Burocracia y competitividad empresarial: diagnóstico y propuestas» (Observatorio de la Pime de Catalunya, 2024), cerca del 70 % de las empresas deben aportar documentación que la Administración ya posee, y una parte significativa se ve obligada a presentar cinco o más documentos repetidos durante sus trámites. Asimismo, las pequeñas y medianas empresas dedican, de media, más de cuarenta horas mensuales a gestiones administrativas, equivalentes a más de una semana laboral completa, mientras que los procedimientos no recurrentes presentan plazos medios de resolución que superan ampliamente los noventa días previstos legalmente.

El objetivo de la presente Ley es corregir prácticas administrativas consolidadas que resultan incompatibles con los principios de eficacia, eficiencia y buena administración, reforzando el deber de las Administraciones Públicas de organizar sus procedimientos y sistemas de información de manera que el ciudadano deje de actuar como intermediario forzoso entre órganos administrativos. En particular, se propone la modificación del régimen de expedición y validez de documentos públicos de uso frecuente —como certificaciones del Registro Civil, notas simples registrales, certificados tributarios y documentos de identidad— con el fin de garantizar su plena eficacia jurídica en formato digital, su reutilización para múltiples trámites administrativos y la supresión de renovaciones periódicas carentes de justificación material o de valor añadido en términos de control público.

Concretamente, se propone la modificación de los artículos y sistemas pertinentes mediante la inclusión de los artículos 82 bis, 82 ter, 82 quater y 82 quinquies en el Registro Civil, partiendo de la consideración del Registro Civil como una base de datos electrónica que da fe pública de los hechos y actos relativos a la identidad, el estado civil y demás circunstancias personales, estableciendo que las certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, filiación y nacionalidad o vecindad civil se presumen vigentes de forma permanente, en atención a la naturaleza del hecho jurídico que genera la inscripción y a su carácter normalmente inalterable o de vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificaciones posteriores debidamente registradas en aquellos supuestos en que el estado civil o las circunstancias personales puedan verse alteradas, como ocurre, entre otros, con el matrimonio, la filiación o la capacidad, corrigiendo la práctica que obligaba a los ciudadanos a renovarlos repetidamente, generando cargas administrativas innecesarias.

En particular, en el caso de las certificaciones de nacimiento y defunción, cuya inscripción responde a hechos únicos que no se modifican con el transcurso del tiempo, se establece un criterio de vigencia permanente de sus certificaciones, tanto literales como en extracto, sin que la exigencia de una antigüedad máxima del documento aporte mayores garantías sobre la veracidad de su contenido. Ello se entiende sin perjuicio de la responsabilidad del interesado de aportar documentación que refleje fielmente la información registral vigente, debiendo asegurarse, en caso de haberse producido alguna modificación inscrita, de que la certificación utilizada incorpore dicha actualización.

De igual modo, se propone la modificación del régimen de expedición del Documento Nacional de Identidad mediante la reforma del artículo 8 del Real Decreto 255/2025, de modo que su renovación se efectúe automáticamente tres meses antes de la caducidad, preferentemente por vía digital, con notificación al titular y presencia física únicamente cuando sea imprescindible para la captura de fotografía o huellas dactilares.

Asimismo, se regula la expedición digital de notas simples del Registro de la Propiedad, incorporando un nuevo apartado 5 bis en el artículo 222 de la Ley Hipotecaria y el artículo 332 del Reglamento Hipotecario, garantizando que las notas simples sean válidas para trámites administrativos, accesibles digitalmente, repetibles sin nueva expedición ni pago adicional, y asegurando su autenticidad e integridad mediante sello electrónico y código de verificación. En el ámbito tributario, se modifica el artículo 73 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de

los tributos, para que los certificados puedan expedirse de forma automatizada y digital, a fin de facilitar su presentación ante terceros.

Asimismo, se incorpora la disposición adicional primera, que habilita el acceso digital y la facilitación de la descarga de todos los certificados y documentos oficiales desde los portales digitales de los registros y organismos públicos competentes, garantizando su validez jurídica equivalente a la del documento físico, su integridad, autenticidad y reutilización en múltiples trámites sin necesidad de nueva expedición. Consecuentemente, se incorpora la disposición adicional segunda, estableciendo la interoperabilidad de los certificados digitales y documentos oficiales entre todos los registros y organismos públicos, de manera que los documentos aportados digitalmente puedan ser consultados y reutilizados directamente por otras administraciones competentes, evitando que la ciudadanía actúe como intermediaria involuntaria y reforzando la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa, haciendo efectivo el mandato de los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015.

En este proceso de generalización del uso de certificados y documentos digitales, se establece expresamente que los registros, administraciones y entidades públicas deberán prestar una atención reforzada a las personas con discapacidad cognitiva, proporcionando medidas de apoyo permanentes y generalizadas para el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, se garantizará que las personas de edad avanzada puedan acceder y utilizar los certificados digitales de forma efectiva, comprensible y segura, evitando que la digitalización se convierta en un nuevo factor de exclusión. Del mismo modo, esta asistencia se prestará siempre que se detecten situaciones o indicios de brecha digital.

La reutilización de certificados y documentos digitales entre registros, administraciones y organismos competentes deberá realizarse sin interrumpir ni retrasar los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos, garantizando en todo caso la integridad, autenticidad y validez jurídica de los documentos consultados.

La presente Proposición de Ley se articula desde el respeto al principio de territorialidad, a las competencias propias de las Comunidades Autónomas y al principio de cooperación institucional. La interoperabilidad entre Administraciones no implicará en ningún caso la imposición de soluciones técnicas, organizativas o tecnológicas uniformes, ni la centralización de sistemas de información, sino la compatibilidad funcional entre modelos diversos definidos en el ejercicio de las respectivas competencias de autoorganización administrativa. Con ello, se refuerza la seguridad jurídica, se reducen costes administrativos y se avanza hacia una Administración más coherente, previsible y alineada con los principios de buena administración y servicio efectivo al interés general.

En conclusión, la presente Proposición de Ley responde a la necesidad de superar disfunciones estructurales en la Administración, reducir cargas administrativas innecesarias, garantizar la interoperabilidad y reutilización de la información pública, y asegurar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos. Su aplicación permitirá una Administración más eficiente, previsible y orientada al servicio del interés general, consolidando la confianza en los procedimientos públicos y sentando las bases para futuras mejoras. Pudiendo esta lógica extenderse a otros trámites administrativos que, por su repetición o complejidad, supongan una carga innecesaria para los ciudadanos, garantizando la coherencia normativa y la protección de los derechos de los interesados.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Proposición de Ley

Artículo uno. *Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.*

Uno. Se añade el artículo 82 bis de la Ley del Registro Civil, con la siguiente redacción:

«Artículo 82 bis. *Certificaciones especiales.*

Las certificaciones, en extracto o literales, de nacimiento o defunción se presumirán vigentes de forma permanente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran acaecer por discordancias entre el contenido de las mismas y la inscripción registral, siempre que dichas discordancias no pudieran atribuirse al propio Registro Civil.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 82 ter, con la siguiente redacción:

«Artículo 82 ter. *Certificaciones de matrimonio.*

Las certificaciones, en extracto o literales, relativas al hecho del matrimonio inscrito en el Registro Civil, incluyendo la declaración de nulidad matrimonial, se presumen vivas y vigentes de forma permanente, sin necesidad de renovarlas repetidamente para su utilización en trámites administrativos.

Esta vigencia permanente se mantendrá sin perjuicio de las inscripciones que reflejen la disolución o nulidad del matrimonio en el propio Registro Civil, ni de las responsabilidades que puedan derivarse de discordancias entre el contenido de la certificación y la inscripción registral, siempre que tales discordancias no puedan atribuirse al propio Registro Civil.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 82 quáter, con la siguiente redacción:

«Artículo 82 quáter. *Certificaciones de filiación.*

Las certificaciones, en extracto o literales, relativas a la filiación inscrita en el Registro Civil se presumen vigentes de forma permanente, sin perjuicio de las inscripciones o modificaciones posteriores de la filiación que consten en el propio Registro Civil, ni de las responsabilidades que puedan derivarse de las discordancias entre el contenido de las mismas y la inscripción registral.»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 82 quinquies, con la siguiente redacción:

«Artículo 82 quinquies. *Certificaciones de nacionalidad y vecindad civil.*

Las certificaciones, en extracto o literales, relativas a la nacionalidad, a su adquisición, conservación, pérdida o modificación, así como las relativas a la vecindad civil, inscritas en el Registro Civil, se presumen vigentes de forma permanente, sin perjuicio de las inscripciones posteriores que afecten a la nacionalidad o la vecindad civil que consten en el propio Registro Civil, ni de las mismas y la inscripción registral, siempre que estas discordancias no puedan atribuirse al propio Registro Civil.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 322-1

17 de abril de 2026

Pág. 6

Artículo dos. *Modificación del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.*

Se modifica el artículo 8, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 8. *Renovación.*

1. Transcurrido el período de validez del Documento Nacional de Identidad, éste se considerará caducado, revocando las atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico. No obstante, la renovación del Documento Nacional de Identidad se efectuará de manera automática tres meses antes de la fecha de caducidad del documento, sin que resulte necesaria la solicitud por parte de la persona titular.

2. La renovación automática se llevará a cabo, preferentemente, por trámite digital, con notificación a la persona titular. La presencia física sólo será necesaria cuando sea imprescindible para la toma de huellas o la captura de fotografía, de acuerdo con los requisitos de los apartados 6.2.d) y f).

3. También será necesario proceder a la renovación del Documento Nacional de Identidad en los supuestos de variación de los datos que constan en el mismo, en los que será imprescindible aportar los documentos justificativos que acrediten dicha variación.»

Artículo tres. *Modificación del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.*

Se añade un nuevo apartado 5 bis al artículo 222, con la siguiente redacción:

«5 bis. Las notas simples podrán expedirse en formato y soporte digital a través de los sistemas oficiales del Registro de la Propiedad, accesibles a cualquier interesado. La nota simple digital tendrá validez para su utilización en trámites administrativos, sin que ello afecte a su naturaleza informativa ni sustituya a la inscripción registral. Cada nota digital deberá estar garantizada mediante el sello electrónico del Registrador y un código electrónico de verificación, asegurando su integridad y origen. Una vez expedida, la nota simple digital podrá ser utilizada repetidamente para todos los efectos administrativos, sin necesidad de nueva expedición ni pago de tasas adicionales, mientras no se produzcan modificaciones de los asientos registrales a que se refiere.»

Artículo cuatro. *Modificación del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.*

Se modifica el apartado 5 del artículo 332, que pasa a tener la siguiente redacción:

«5 bis. La nota simple informativa consistirá únicamente en un extracto sucinto del contenido de los asientos vigentes relativos a la finca objeto de manifestación, en el que deberá constar la identificación de la misma, la identidad del titular o titulares de los derechos inscritos sobre ella, y la extensión, naturaleza y limitaciones de dichos derechos. Asimismo, se harán constar las prohibiciones o restricciones que afecten a los titulares o a los derechos inscritos.

La nota simple podrá expedirse en formato digital a través de los sistemas oficiales del Registro, garantizando su autenticidad e integridad mediante sello electrónico del Registrador y código de verificación.

La nota simple digital tendrá validez para su utilización en trámites administrativos, sin que ello afecte a su naturaleza informativa ni sustituya a la inscripción registral. Una vez expedida, podrá ser utilizada de manera reiterada sin necesidad de nueva expedición ni pago de tasas adicionales, mientras no se produzcan modificaciones de los asientos registrales a que se refiere.

La nota simple deberá reflejar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, sin extenderse más allá de lo necesario para satisfacer el interés legítimo del solicitante, y podrá referirse a determinados extremos solicitados por el interesado, si, a juicio del Registrador, con independencia de quién sea éste, se justifica suficientemente el interés legítimo, según la finalidad de la información requerida. Dicho interés se presumirá en los supuestos establecidos en la normativa vigente, incluidos los efectos tributarios, valoraciones inmobiliarias y otorgamiento de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, con inserción literal si lo requiere el solicitante.»

Artículo cinco. *Modificación del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.*

Se modifica el apartado 1 del artículo 73, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. El órgano competente de la Administración tributaria deberá expedir el certificado en el plazo de 20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto. El certificado se enviará al lugar señalado a tal efecto en la solicitud o, en su defecto, al domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante.

Salvo que se establezca lo contrario, la falta de emisión de un certificado en plazo no determinará que se entienda emitido con carácter positivo.

Previa solicitud del obligado tributario, los certificados tributarios podrán expedirse por medios electrónicos de forma automatizada, mediante su generación y puesta a disposición directa a través de la sede electrónica de la Administración tributaria competente, sin intervención de personal ni necesidad de actuaciones administrativas adicionales.

La expedición automatizada se entenderá realizada desde el momento en que el certificado quede disponible para su descarga, a todos los efectos, y se considerará cumplida dentro del plazo máximo previsto en el apartado 1 del presente artículo.»

Disposición adicional primera. *Acceso digital y validez jurídica de los certificados oficiales.*

1. Los registros y organismos públicos competentes para expedir certificados y documentos oficiales deben habilitar, en sus portales electrónicos o aplicaciones oficiales, apartados específicos de acceso y descarga directa de los certificados que emitan. Este acceso deberá permitir a los ciudadanos obtener los documentos sin necesidad de desplazamiento físico ni intervención de intermediarios, garantizando la integridad y autenticidad de la información obtenida.

2. Los certificados y documentos obtenidos mediante los portales y aplicaciones electrónicas producirán los mismos efectos jurídicos y validez documental que los documentos expedidos en formato físico, para todos los trámites administrativos dentro del correspondiente ámbito competencial, sin necesidad de formalidades adicionales ni requisitos suplementarios para su utilización.

3. Los portales electrónicos y aplicaciones tendrán que garantizar la integridad, autenticidad y origen de los certificados mediante firma electrónica calificativa del responsable del registro u organismo emisor y códigos de verificación electrónicos, asegurando la validez permanente y la posibilidad de uso repetido de los certificados en múltiples trámites sin necesidad de nueva expedición.

4. Los certificados obtenidos digitalmente podrán ser consultados y utilizados por los demás registros y organismos competentes a través de bases de datos interoperables, sin necesidad de que el ciudadano aporte copias adicionales. El acceso a

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 322-1

17 de abril de 2026

Pág. 8

la información deberá respetar la normativa de protección de datos de carácter personal y los estándares de seguridad de la información vigentes.

Disposición adicional segunda. *Reutilización e interoperabilidad de certificados digitales.*

1. Los certificados y documentos oficiales aportados digitalmente a cualquier registro u organismo público competente podrán ser consultados y reutilizados directamente por los demás registros y organismos competentes a través de bases de datos interoperables, sin necesidad de que el interesado presente copias adicionales.

2. Los registros, administraciones y entidades que hagan uso de los certificados digitales deberán prestar una atención reforzada a las personas con discapacidad cognitiva y a las personas de edad avanzada, proporcionando medidas de apoyo permanentes y generalizadas para el ejercicio efectivo de su capacidad jurídica. Asimismo, deberán garantizar la existencia de canales alternativos de asistencia y acompañamiento, especialmente a través de las administraciones de proximidad, a fin de evitar que la digitalización se convierta en un factor de exclusión. Del mismo modo, esta asistencia se prestará siempre que se detecten situaciones o indicios de brecha digital.

3. La interoperabilidad entre organismos deberá llevarse a cabo respetando la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y de seguridad de la información, garantizando la integridad, autenticidad y origen de los certificados digitales, y permitiendo su reutilización en trámites administrativos sin necesidad de nueva expedición, sin que la consulta o transmisión entre registros y organismos interrumpa ni modifique los plazos legales de tramitación establecidos en los procedimientos administrativos correspondientes.

Disposición adicional tercera. *Coordinación con las Comunidades Autónomas en el desarrollo reglamentario.*

1. El desarrollo reglamentario de la presente Ley, así como la definición de los procedimientos de interoperabilidad, los sistemas técnicos de intercambio de información, los regímenes de acceso electrónico, las tasas asociadas y cualesquiera otras cuestiones organizativas o procedimentales vinculadas a la expedición, verificación y reutilización de certificados y documentos públicos, se llevará a cabo respetando el principio de cooperación y diálogo institucional con las Comunidades Autónomas que ostenten competencias en la materia, garantizando la coherencia del sistema, la interoperabilidad entre Administraciones y el pleno respeto al reparto constitucional de competencias.

2. El Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas competentes en materia de expedición de certificados y documentos oficiales, deberá, en el plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, establecer los instrumentos, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar el acceso electrónico, la expedición digital, la verificación y la reutilización de los certificados y documentos oficiales a que se refiere esta Ley, respetando las competencias autonómicas y asegurando la interoperabilidad entre los distintos registros y organismos públicos.

Disposición adicional cuarta. *Habilitación normativa.*

Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley, limitadas a los aspectos procedimentales, técnicos y de interoperabilidad que resulten indispensables para su aplicación, de conformidad con el orden constitucional de competencias.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. *Rango jerárquico.*

Mantienen su rango de real decreto todos los preceptos de rango reglamentario reformados en esta ley, que podrán ser modificados por una norma de ese mismo rango.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA SIMPLIFICACIÓ I RACIONALITAT DELS TRÀMITS CIUTADANS

Exposició de motius

En l'àmbit de l'administració, es pot definir l'eficiència com el balanç positiu que resulta de l'anàlisi del resultat obtingut i dels recursos invertits per assolir-lo. S'entén que hi ha eficiència quan s'utilitzen els mínims recursos possibles per aconseguir un objectiu.

La complexitat administrativa constitueix avui un dels principals obstacles estructurals en la relació entre la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques. L'acumulació de tràmits, la reiteració d'exigències documentals, la inèrcia organitzativa de les mateixes administracions i la manca de coordinació efectiva entre els òrgans administratius generen dilacions, inseguretats jurídica i una càrrega desproporcionada per a les persones interessades, obligant-les a assumir costos de temps i de gestió que no responen a necessitats reals de control públic, sinó a dèficits interns de funcionament administratiu. Aquesta situació repercuteix directament en l'accés a drets, prestacions i serveis públics en àmbits com ara els ajuts socials, les prestacions per dependència, les beques, els procediments d'estrangeria o l'acreditació de situacions personals, en dificulta l'exercici efectiu i erosiona la confiança en l'Administració.

La simplificació administrativa constitueix, així mateix, un element essencial del govern obert, en la mesura que reforça la transparència operativa, la responsabilitat activa de les institucions i la confiança de la ciutadania en el funcionament dels poders públics. Un model administratiu modern no pot continuar basant-se en la reiteració sistemàtica de requeriments documentals a la ciutadania, sinó que ha de partir del principi que la càrrega de la interoperabilitat, la coordinació interna i la gestió eficient de la informació correspon a les mateixes administracions públiques.

Advocar per la reducció dels tràmits administratius en favor de l'eficiència beneficia en primer lloc la ciutadania, però també la pròpia Administració, que veu reduïda la seva burocràcia i, en conseqüència, la despesa pública, fet que permet destinar els recursos a l'execució d'objectius realment rellevants.

L'ordenament jurídic vigent no manca d'instruments adequats, sinó que presenta un problema d'aplicació efectiva. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, configura un model d'actuació basat en l'eficiència, la simplificació procedimental i la responsabilitat activa de l'Administració en la gestió de la informació que ja obra en el seu poder. En particular, la redacció vigent dels apartats 2 i 3 de l'article 28 —introduïda com a conseqüència de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals— reforça expressament el dret de les persones interessades a no aportar documents que ja hagin estat elaborats o que es trobin en poder de qualsevol

administració pública, així com l'obligació correlativa d'aquestes d'obtenir-los per mitjans electrònics, garantint alhora el ple respecte a la normativa de protecció de dades personals.

No obstant això, l'experiència pràctica evidencia un incompliment sistemàtic d'aquest marc normatiu, traslladant a la ciutadania i a les empreses la càrrega de suplir la manca d'interoperabilitat i d'organització interna. Per aquest motiu, es fa necessària la creació d'una administració més propera, més transparent, més eficient i centrada en les necessitats reals de la ciutadania i del teixit empresarial. Aquesta situació resulta especialment lesiva quan afecta les administracions de proximitat, que sovint disposen de la informació necessària per resoldre els procediments amb més rapidesa i amb un millor coneixement de la realitat social de la ciutadania, però es veuen condicionades per disfuncions estructurals de coordinació interadministrativa alienes al seu àmbit d'actuació.

En l'àmbit empresarial, segons l'estudi «Burocràcia i competitivitat empresarial: diagnosi i propostes» (Observatori de la Pime de Catalunya, 2024), prop del 70 % de les empreses han d'aportar documentació que l'Administració ja té en el seu poder, i una part significativa es veu obligada a presentar cinc o més documents repetits durant la tramitació dels seus procediments. Així mateix, les petites i mitjanes empreses dediquen, de mitjana, més de quaranta hores mensuals a gestions administratives, equivalents a més d'una setmana laboral completa, mentre que els procediments no recurrents presenten terminis mitjans de resolució que superen àmpliament els noranta dies previstos legalment.

L'objectiu de la present Llei és corregir pràctiques administratives consolidades que resulten incompatibles amb els principis d'eficàcia, eficiència i bona administració, reforçant el deure de les administracions públiques d'organitzar els seus procediments i sistemes d'informació de manera que la ciutadania deixi d'actuar com a intermediària forçosa entre òrgans administratius. En particular, es proposa la modificació del règim d'expedició i validesa de documents públics d'ús freqüent —com ara les certificacions del Registre Civil, les notes simples registrals, els certificats tributaris i els documents d'identitat— amb la finalitat de garantir-ne la plena eficàcia jurídica en format digital, la reutilització per a múltiples tràmits administratius i la supressió de renovacions periòdiques mancades de justificació material o de valor afegit en termes de control públic.

Concretament, es proposa la modificació dels articles i sistemes pertinents mitjançant la incorporació dels articles 82 bis, 82 ter, 82 quater i 82 quinquies al Registre Civil, partint de la consideració d'aquest com una base de dades electrònica que dona fe pública dels fets i actes relatius a la identitat, l'estat civil i la resta de circumstàncies personals. Així, s'estableix que les certificacions de naixement, defunció, matrimoni, filiació i nacionalitat o veïnatge civil es presumeixen vigents de manera permanent, atenent la naturalesa del fet jurídic que origina la inscripció i el seu caràcter generalment inalterable o de vigència indefinida, sens perjudici de les modificacions posteriors degudament inscrites en aquells supòsits en què l'estat civil o les circumstàncies personals puguin veure's alterats, com succeeix, entre d'altres, amb el matrimoni, la filiació o la capacitat. Amb això es corregeix la pràctica que obligava la ciutadania a renovar-los reiteradament, generant càrregues administratives innecessàries.

En particular, en el cas de les certificacions de naixement i de defunció, la inscripció de les quals respon a fets únics que no es modifiquen amb el pas del temps, s'estableix un criteri de vigència permanent de les seves certificacions, tant literals com en extracte, sense que l'exigència d'una antiguitat màxima del document aportí majors garanties sobre la veracitat del seu contingut. Això s'entén sens perjudici de la responsabilitat de la persona interessada d'aportar documentació que reflecteixi fidelment la informació registral vigent, i d'assegurar-se, en cas que s'hagi produït alguna modificació inscrita, que la certificació utilitzada incorpori aquesta actualització.

De la mateixa manera, es proposa la modificació del règim d'expedició del Document Nacional d'Identitat mitjançant la reforma de l'article 8 del Reial decret 255/2025, de

manera que la seva renovació s'efectuï automàticament tres mesos abans de la caducitat, preferentment per via digital, amb notificació a la persona titular i amb presència física únicament quan sigui imprescindible per a la captació de la fotografia o de les empremtes dactilars.

Així mateix, es regula l'expedició digital de les notes simples del Registre de la Propietat, mitjançant la incorporació d'un nou apartat 5 bis a l'article 222 de la Llei hipotecària i la modificació de l'article 332 del Reglament hipotecari, garantint que les notes simples siguin vàlides per a tràmits administratius, accessibles en format digital, reutilitzables sense necessitat de nova expedició ni de pagament addicional, i assegurant-ne l'autenticitat i la integritat mitjançant el segell electrònic i el codi de verificació. En l'àmbit tributari, es modifica l'article 73 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, per tal que els certificats puguin expedir-se de manera automatitzada i digital, amb la finalitat de facilitar-ne la presentació davant de tercers.

Igualment, s'incorpora la disposició addicional primera, que habilita l'accés digital i la descàrrega directa de tots els certificats i documents oficials des dels portals digitals dels registres i organismes públics competents, garantint-ne una validesa jurídica equivalent a la del document en format físic, així com la seva integritat, autenticitat i reutilització en múltiples tràmits sense necessitat de nova expedició. Conseqüentment, s'incorpora la disposició addicional segona, que estableix la interoperabilitat dels certificats digitals i dels documents oficials entre tots els registres i organismes públics, de manera que els documents aportats digitalment puguin ser consultats i reutilitzats directament per altres administracions competents, evitant que la ciutadania actuï com a intermediària involuntària i reforçant la seguretat jurídica i l'eficiència administrativa, tot fent efectiu el mandat dels apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 39/2015.

En aquest procés de generalització de l'ús de certificats i documents digitals, s'estableix expressament que els registres, les administracions i les entitats públiques hauran de prestar una atenció reforçada a les persones amb discapacitat cognitiva, proporcionant mesures de suport permanents i generalitzades per a l'exercici efectiu de la seva capacitat jurídica. Així mateix, es garantirà que les persones d'edat avançada puguin accedir i utilitzar els certificats digitals de manera efectiva, comprensible i segura, evitant que la digitalització esdevingui un nou factor d'exclusió. De la mateixa manera, aquesta assistència es prestarà sempre que es detectin situacions o indicis de bretxa digital.

La reutilització de certificats i documents digitals entre registres, administracions i organismes competents s'haurà de dur a terme sense interrompre ni retardar els terminis màxims de resolució dels procediments administratius, garantint en tot cas la integritat, l'autenticitat i la validesa jurídica dels documents consultats.

La present Proposició de Llei s'articula des del respecte al principi de territorialitat, a les competències pròpies de les comunitats autònomes i al principi de cooperació institucional. La interoperabilitat entre administracions no implicarà en cap cas la imposició de solucions tècniques, organitzatives o tecnològiques uniformes, ni la centralització dels sistemes d'informació, sinó la compatibilitat funcional entre models diversos definits en l'exercici de les respectives competències d'autoorganització administrativa. Amb això, es reforça la seguretat jurídica, es redueixen els costos administratius i s'avança cap a una Administració més coherent, previsible i alineada amb els principis de bona administració i de servei efectiu a l'interès general.

En conclusió, la present Proposició de Llei respon a la necessitat de superar disfuncions estructurals en l'Administració, reduir càrregues administratives innecessàries, garantir la interoperabilitat i la reutilització de la informació pública, i assegurar l'accés efectiu de la ciutadania als seus drets. La seva aplicació permetrà una Administració més eficient, previsible i orientada al servei de l'interès general, consolidant la confiança en els procediments públics i assentant les bases per a futures millores. Aquesta lògica podrà estendre's a altres tràmits administratius que, per la seva

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 322-1

17 de abril de 2026

Pág. 12

reiteració o complexitat, suposin una càrrega innecessària per a la ciutadania, garantint la coherència normativa i la protecció dels drets de les persones interessades.

Proposició de Llei

Article primer. *Modificació de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.*

U. S'afegeix l'article 82 bis de la Llei del Registre Civil, amb la següent redacció:

«Article 82 bis. *Certificacions especials.*

Les certificacions, en extracte o literals, de naixement o defunció es presumiran vigents de manera permanent, sense perjudici de les responsabilitats que poguessin derivar-se de discordàncies entre el contingut d'aquestes i la inscripció registral, sempre que aquestes discordàncies no puguin atribuir-se al propi Registre Civil.»

Dos. S'afegeix un nou article 82 ter, amb la següent redacció:

«Article 82 ter. *Certificacions de matrimoni.*

Les certificacions, en extracte o literals, relatives al fet del matrimoni inscrit en el Registre Civil, inclosa la declaració de nul·litat matrimonial, es presumeixen vives i vigents de manera permanent, sense necessitat de renovar-les repetidament per a la seva utilització en tràmits administratius.

Aquesta vigència permanent es mantindrà sense perjudici de les inscripcions que reflecteixin la dissolució o nul·litat del matrimoni en el propi Registre Civil, ni de les responsabilitats que puguin derivar-se de discordàncies entre el contingut de la certificació i la inscripció registral, sempre que aquestes discordàncies no puguin atribuir-se al propi Registre Civil.»

Tres. S'afegeix un nou article 82 quater, amb la següent redacció:

«Article 82 quater. *Certificacions de filiació.*

Les certificacions, en extracte o literals, relatives a la filiació inscrita en el Registre Civil es presumeixen vigents de manera permanent, sense perjudici de les inscripcions o modificacions posteriors de la filiació que constin en el propi Registre Civil, ni de les responsabilitats que puguin derivar-se de les discordàncies entre el contingut d'aquestes i la inscripció registral.»

Quatre. S'afegeix un nou article 82 quinques, amb la següent redacció:

«Article 82 quinques. *Certificacions de nacionalitat i veïnatge civil.*

Les certificacions, en extracte o literals, relatives a la nacionalitat, a la seva adquisició, conservació, pèrdua o modificació, així com les relatives al veïnatge civil, inscrites en el Registre Civil, es presumeixen vigents de manera permanent, sense perjudici de les inscripcions posteriors que afectin la nacionalitat o el veïnatge civil que constin en el propi Registre Civil, ni de les responsabilitats que puguin derivar-se de discordàncies entre el contingut d'aquestes i la inscripció registral, sempre que aquestes discordàncies no puguin atribuir-se al propi Registre Civil.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 322-1

17 de abril de 2026

Pág. 13

Article segon. *Modificació del Reial Decret 255/2025, de 1 d'abril, pel qual es regula el Document Nacional d'Identitat.*

Es modifica l'article 8, que passa a tenir la següent redacció:

«Article 8. *Renovació.*

1. Transcorregut el període de validesa del Document Nacional d'Identitat, aquest es considerarà caducat, revocant-se les atribucions i efectes que li reconeix l'ordenament jurídic. No obstant això, la renovació del Document Nacional d'Identitat s'efectuarà de manera automàtica tres mesos abans de la data de caducitat del document, sense que sigui necessària la sol·licitud per part de la persona titular.

2. La renovació automàtica es durà a terme, preferentment, per tràmit digital, amb notificació a la persona titular. La presència física només serà necessària quan sigui imprescindible per a la presa de les empremtes o la captura de fotografia, d'acord amb els requisits dels apartats 6.2.d) i f).

3. També serà necessari procedir a la renovació del Document Nacional d'Identitat en els supòsits de variació de les dades que consten en el mateix, en els quals serà imprescindible aportar els documents justificatius que acreditin aquesta variació.»

Article tres. *Modificació del Reial Decret de 8 de febrer de 1946 pel qual s'aprova la nova redacció oficial de la Llei Hipotecària.*

S'afegeix un nou apartat 5 bis a l'article 222, amb la següent redacció:

«5 bis. Les notes simples podran expedir-se en format i suport digital a través dels sistemes oficials del Registre de la Propietat, accessibles a qualsevol interessat. La nota simple digital tindrà validesa per a la seva utilització en tràmits administratius, sense que això afecti la seva naturalesa informativa ni substitueixi la inscripció registral. Cada nota digital haurà d'estar garantida mitjançant el segell electrònic del Registrador i un codi electrònic de verificació, assegurant la seva integritat i origen. Un cop expedida, la nota simple digital podrà ser utilitzada repetidament per a tots els efectes administratius, sense necessitat de nova expedició ni pagament de taxes addicionals, mentre no es produeixin modificacions dels assentaments registrals a què fa referència.»

Article quatre. *Modificació del Reial Decret de 14 de febrer de 1947 pel qual s'aprova el Reglament Hipotecari.*

Es modifica l'apartat 5 de l'article 332, que passa a tenir la següent redacció:

«5 bis. La nota simple informativa consistirà únicament en un extracte succint del contingut dels assentaments vigents relatius a la finca objecte de manifestació, en què hi haurà de constar la identificació de la mateixa, la identitat del titular o titulars dels drets inscrits sobre ella, i l'extensió, naturalesa i limitacions d'aquests drets. Així mateix, es faran constar les prohibicions o restriccions que afectin els titulars o els drets inscrits.

La nota simple podrà expedir-se en format digital a través dels sistemes oficials del Registre, garantint la seva autenticitat i integritat mitjançant el segell electrònic del Registrador i un codi de verificació.

La nota simple digital tindrà validesa per a la seva utilització en tràmits administratius, sense que això afecti la seva naturalesa informativa ni substitueixi la inscripció registral. Un cop expedida, podrà ser utilitzada de manera reiterada sense necessitat de nova expedició ni pagament de taxes addicionals, mentre no es produeixin modificacions dels assentaments registrals a què fa referència.

La nota simple haurà de reflectir fidelment les dades contingudes als assentaments registrals, sense estendre's més enllà del necessari per satisfer l'interès legítim del sol·licitant, i podrà referirse a determinats extrems sol·licitats per l'interessat, si, a judici del Registrador, independentment de qui sigui aquest, es justifica suficientment l'interès legítim segons la finalitat de la informació requerida. Aquest interès es presumirà en els supòsits establerts a la normativa vigent, inclosos els efectes tributaris, valoracions immobiliàries i atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, amb inserció literal si ho requereix el sol·licitant.»

Article cinc. *Modificació del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i dels procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.*

Es modifica l'apartat 1 de l'article 73, que passa a tenir la següent redacció:

«1. L'òrgan competent de l'Administració tributària haurà d'expedir el certificat en el termini de 20 dies, llevat que en la normativa reguladora del certificat s'hagi fixat un termini diferent. El certificat s'enviarà al lloc assenyalat a tal efecte en la sol·licitud o, en defecte d'aquest, al domicili fiscal de l'obligat tributari o del seu representant.

Excepte que s'estableixi el contrari, la manca d'emissió d'un certificat dins del termini no determinarà que s'entengui emès amb caràcter positiu.

Prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, els certificats tributaris podran expedir-se per mitjans electrònics de manera automatitzada, mitjançant la seva generació i posada a disposició directa a través de la seu electrònica de l'Administració tributària competent, sense intervenció de personal ni necessitat d'actuacions administratives addicionals.

L'expedició automatitzada s'entendrà realitzada des del moment en què el certificat quedi disponible per a la seva descàrrega, a tots els efectes, i es considerarà complerta dins del termini màxim previst a l'apartat 1 del present article.»

Disposició addicional primera. *Accés digital i validesa jurídica dels certificats oficials.*

1. Els registres i organismes públics competents per expedir certificats i documents oficials hauran d'habilitar, als seus portals electrònics o aplicacions oficials, apartats específics d'accés i descàrrega directa dels certificats que emetin. Aquest accés haurà de permetre als ciutadans obtenir els documents sense necessitat de desplaçament físic ni intervenció d'intermediaris, garantint la integritat i autenticitat de la informació obtinguda.

2. Els certificats i documents obtinguts mitjançant els portals i aplicacions electròniques produiran els mateixos efectes jurídics i validesa documental que els documents expedits en format físic, per a tots els tràmits administratius dins de l'àmbit competencial corresponent, sense necessitat de formalitats addicionals ni requisits suplementaris per a la seva utilització.

3. Els portals electrònics i aplicacions hauran de garantir la integritat, autenticitat i origen dels certificats mitjançant signatura electrònica qualificativa del responsable del registre o organisme emissor i codis de verificació electrònics, assegurant la validesa permanent i la possibilitat d'ús reiterat dels certificats en múltiples tràmits sense necessitat de nova expedició.

4. Els certificats obtinguts digitalment podran ser consultats i utilitzats pels altres registres i organismes competents a través de bases de dades interoperables, sense necessitat que el ciutadà porti còpies addicionals. L'accés a la informació haurà de

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

respectar la normativa de protecció de dades de caràcter personal i els estàndards de seguretat de la informació vigents.

Disposició addicional segona. *Reutilització i interoperabilitat de certificats digitals.*

1. Els certificats i documents oficials aportats digitalment a qualsevol registre o organisme públic competent podran ser consultats i reutilitzats directament pels altres registres i organismes competents a través de bases de dades interoperables, sense necessitat que l'interessat presenti còpies addicionals.

2. Els registres, administracions i entitats que facin ús dels certificats digitals hauran de prestar una atenció reforçada a les persones amb discapacitat cognitiva i a les persones d'edat avançada, proporcionant mesures de suport permanents i generalitzades per a l'exercici efectiu de la seva capacitat jurídica. Així mateix, hauran de garantir l'existència de canals alternatius d'assistència i acompanyament, especialment a través de les administracions de proximitat, amb la finalitat d'evitar que la digitalització es converteixi en un factor d'exclusió. Aquesta assistència s'oferirà també sempre que es detectin situacions o indicis de bretxa digital.

3. La interoperabilitat entre organismes s'haurà de dur a terme respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat de la informació, garantint la integritat, autenticitat i origen dels certificats digitals, i permetent-ne la reutilització en tràmits administratius sense necessitat de nova expedició, sense que la consulta o transmissió entre registres i organismes interrompi o modifiqui els terminis legals de tramitació establerts en els procediments administratius corresponents.

Disposició addicional tercera. *Coordinació amb les Comunitats Autònomes en el desenvolupament reglamentari.*

1. El desenvolupament reglamentari de la present Llei, així com la definició dels procediments d'interoperabilitat, els sistemes tècnics d'intercanvi d'informació, els règims d'accés electrònic, les taxes associades i qualsevol altra qüestió organitzativa o procedimental vinculada a l'expedició, verificació i reutilització de certificats i documents públics, es durà a terme respectant el principi de cooperació i diàleg institucional amb les Comunitats Autònomes que ostentin competències en la matèria, garantint la coherència del sistema, la interoperabilitat entre Administracions i el ple respecte al repartiment constitucional de competències.

2. El Govern, en coordinació amb les Comunitats Autònomes competents en matèria d'expedició de certificats i documents oficials, haurà, en el termini màxim de 12 mesos des de l'entrada en vigor de la present Llei, d'establir els instruments, sistemes i procediments necessaris per garantir l'accés electrònic, l'expedició digital, la verificació i la reutilització dels certificats i documents oficials a què es refereix aquesta Llei, respectant les competències autonòmiques i assegurant la interoperabilitat entre els diferents registres i organismes públics.

Disposició addicional quarta. *Habilitació normativa.*

Es facultarà el Govern per dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament d'aquesta llei, limitades als aspectes procedimentals, tècnics i d'interoperabilitat que resultin indispensables per a la seva aplicació, d'acord amb l'ordenament constitucional de competències.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 322-1

17 de abril de 2026

Pág. 16

Disposició final primera. *Rang jeràrquic.*

Mantenen el seu rang de reial decret tots els preceptes de rang reglamentari reformats en aquesta llei, que podran ser modificats per una norma d'aquest mateix rang.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

cve: BOCG-15-B-322-1